

REPÚBLICA DE COLOMBIA



SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL
Medellín, veintiséis (26) de julio de dos mil veintidós (2022)

DEMANDANTE	: OLGA LUCÍA BEDOYA RESTREPO
DEMANDADO :	: COLPENSIONES
LITISCONSORTE NECESARIO	: MARÍA YURLEY GONZÁLEZ BEDOYA, ISBELI YURANI GONZÁLEZ BEDOYA y JEFERSON STIVEN GONZÁLEZ BEDOYA
TIPO DE PROCESO	: ORDINARIO
RADICADO NACIONAL	: 05-001-31-05-013-2016-01439-01
RADICADO INTERNO	: 154-22
DECISIÓN	: MODIFICA, CONDENA y CONFIRMA
ACTA NÚMERO	: 186

En la fecha, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL, procede a emitir sentencia de segunda instancia en la que se estudia el recurso de apelación, en el proceso de la referencia. La Sala, previa deliberación, adoptó el proyecto presentado por el ponente, Doctor HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ, que a continuación se traduce en la siguiente decisión:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la ley 2213 del 13 de junio de 2022, la providencia en segunda instancia se profiere escrita.

ANTECEDENTES

Pretende la accionante se le ORDENE a Colpensiones a reconocer la pensión de sobreviviente en calidad de cónyuge en forma vitalicia y al menor Jeferson Stiven González Bedoya en calidad de hijo, hasta los 18 años o hasta los 25 años en caso de acreditar los requisitos del literal C del art. 47 de la Ley 100 de 1993, por la muerte del Sr. Saúl de Jesús González Arango; la pensión se pague en forma retroactiva desde el fallecimiento del Sr. Saúl de Jesús González Arango; las sumas sean indexadas y actualizadas de acuerdo al IPC; y se condene en costas a la accionada.

Subsidiariamente solicita, que, en caso de no poderse reconocer la pensión de sobreviviente por falta de requisitos, sea reconocida la indemnización sustitutiva, equivalente a la que le hubiera correspondido en el caso de la

indemnización sustitutiva de la pensión de invalidez consagrada en los arts. 37 y 49 de la Ley 100 de 1993.

Pretensiones de la demanda las fundamenta, en que los señores Saúl de Jesús González Arango y Olga Lucía Bedoya Restrepo contrajeron matrimonio católico el 5 de diciembre de 1987, y de dicha unión procrearon a los jóvenes Jeferson Stiven González Bedoya, María Yurley González Bedoya e Isbeli Yurani González Bedoya; de los tres hijos, el único menor de edad es Jeferson Stiven González Bedoya; el Sr. Saúl de Jesús González Arango falleció el 17 de noviembre de 2011; el afiliado fallecido cotizó en toda su vida laboral, un total de 794 semanas aproximadamente, según cálculos manuales realizados con base en el informe de semanas cotizadas en Colpensiones, la resolución 177.494 de 2013 y la relación de aportes de Saludcoop EPS.

El Juzgado de conocimiento, mediante auto admisorio de la demanda del 24 de noviembre de 2016, ordenó integrar en calidad de terceros intervinientes a las señoras María Yurley González Bedoya e Isbeli Yurani González Bedoya porque en la resolución 177.494 de 2013 solicitaron la prestación económica en calidad de hijas del causante (fl. 43 del expediente digital 01). En auto del 25 de octubre de 2018 el Juzgado Trece laboral del Circuito de Medellín modificó la integración de las señoras María Yurley González Bedoya e Isbeli Yurani González Bedoya en calidad de tercero interviniente por la calidad de litisconsorcio necesario, teniendo en cuenta que a cada una de ellas les fue reconocida la prestación económica en un 33.33% (fl. 119 y 120).

En auto del 28 de julio de 2020 modificó la vinculación del Sr. Jeferson Stiven González Bedoya al proceso quien actuaba en calidad de demandante, por encontrar que le fue reconocida la prestación a la que aspiraba en un 33% mediante resolución 272.313 de 2017, por lo que el despacho atendiendo al hecho sobreviniente, consideró que la calidad del Sr. Jeferson Stiven González Bedoya dentro del proceso debía mutar, por lo que se ordenó notificar al Sr. Jeferson Stiven González Bedoya en calidad de Litisconsorcio necesario por pasiva y aunado a lo anterior, porque cuenta con 19 años de edad (expediente digital 03). En auto del 2 de marzo de 2021 se ordenó el emplazamiento del Sr. Jeferson Stiven González Bedoya y se le informó que en caso de no comparecer el trámite del proceso continuaría con el defensor de oficio designado (expediente digital 16).

RESPUESTA A LA DEMANDA

Colpensiones en la contestación de la demanda no acepta que el causante haya cotizado 794 semanas, porque según el contenido de la resolución 177.494 de 2013, cotizó 692 semanas. No le consta el lugar donde laboró el Sr. Saúl de Jesús González Arango previo a su fallecimiento, la labor desempeñada y el salario devengado; y que la resolución 177.494 de 2013 de Colpensiones no guarde concordancia con el reporte de la EPS Saludcoop y el contrato de trabajo, los cuales que dan cuenta que el contrato laboral continuó desde septiembre de 2005 a noviembre de 2011. La afirmación relacionada con el cumplimiento de los requisitos de semanas, establecida en el art. 46 de la Ley 100 de 1993, sostiene que no es un hecho sino una apreciación. En relación a las demás pretensiones de la demanda, dice que con ciertas y aclara que el Sr. Jeferson Stiven González Bedoya a la fecha de la presentación de la demanda no era menor de edad. Se opuso a las pretensiones de la demanda (fls 67 a 70 del expediente digital 01)

En auto del 11 de junio de 2021 se dio por no contestada la demanda por los señores Jeferson Stiven González Bedoya, María Yurley González Bedoya e Isbeli Yurani González Bedoya (expediente digital 26).

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

En sentencia del 6 de junio de 2022, el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín, CONDENÓ a Colpensiones a reconocer y pagar a la Sra. Olga Lucía Bedoya Restrepo, una cuota parte de 50% de la pensión de sobrevivientes por la muerte del Sr. Saúl de Jesús González Arango, en su condición de cónyuge separada de hecho. Como retroactivo pensional liquidado desde el 10 de noviembre de 2013 hasta el 31 de mayo de 2022, asciende a la suma de \$33.188.850. A partir del 1º de junio de 2022 Colpensiones continuará pagando a la Sra. Olga Lucía Bedoya Restrepo una cuota parte de 50% de la pensión de sobrevivientes, sin perjuicio de la mesada adicional de diciembre y los incrementos de Ley. La extinción del derecho de alguno de los beneficiarios, acrecerá el de los demás; condenó a Colpensiones a reconocer y pagar a la Sra. Olga Lucía Bedoya Restrepo, la indexación de las cuotas partes pensionales, según la fórmula y directrices expuestas.

AUTORIZÓ a Colpensiones a efectuar los descuentos, incluso retroactivos, con destino al sistema de seguridad social en salud; autorizó a Colpensiones a menguar la mesada pensional de los jóvenes Jeferson Stiven González Bedoya e Isbeli Yurani González Bedoya en un 25% a cada uno, y la extinción del derecho de alguno de los beneficiarios, acrecerá el de los demás.

DECLARÓ PROBADA parcialmente la excepción de prescripción de los derechos causados y exigibles con anterioridad al 10 de noviembre de 2013. ABSOLVIÓ a Colpensiones de las demás pretensiones incoadas en su contra. E impuso costas a cargo de Colpensiones.

El presente proceso se conoce en el grado jurisdiccional de consulta.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Las partes no presentan alegatos de conclusion.

PRONUNCIAMIENTO JURÍDICO

El problema jurídico se centra en determinar si la Sra. Olga Lucía Bedoya Restrepo tiene derecho a la pensión de sobreviviente por la muerte del Sr. Saúl de Jesús González Arango, al retroactivo pensional, la indexación y las costas impuestas en primera instancia.

No es objeto de discusión que los señores Saúl de Jesús González Arango y Olga Lucía Bedoya Restrepo contrajeron matrimonio el 5 de diciembre de 1987 (fl. 13 del expediente digital 01); de esa unión procrearon a los jóvenes María Yurley, Isbeli Yurani y Jeferson Stiven González Bedoya (fls. 52 a 68 del expediente digital 22); el Sr. Saúl de Jesús González Arango falleció el 17 de noviembre de 2011 (fl. 23 del expediente digital).

El 27 de marzo de 2012, la Sra. Olga Lucía Bedoya Restrepo y los jóvenes María Yurley, Isbeli Yurani y Jeferson Stiven González Bedoya solicitaron pensión de sobreviviente, la cual fue negada en resolución 177.494 de 2013, por considerar Colpensiones, que el afiliado no cotizó 50 semanas dentro de los 3 años anteriores a su fallecimiento (fls. 7 a 11 del expediente digital).

La demandante solicitó nuevo estudio del reconocimiento de la pensión de sobreviviente el 5 de septiembre de 2017 y en resolución 272.313 de 2017 se reconoció, que el Sr. Saúl de Jesús González Arango contaba con 841 semanas cotizadas desde el 31 de octubre de 1989 al 17 de noviembre de 2011, reconoció y ordenó pagar la pensión de sobreviviente al joven Jeferson Stiven González Bedoya a partir del 17 de noviembre de 2011 en un 33.34%, dejó en reserva la pensión de sobreviviente de las hijas María Yurley González Bedoya e Isbeli Yurani González Bedoya, en un 33.33% a cada una, y negó el reconocimiento de la pensión de sobreviviente a la Sra. Olga Lucía Bedoya Restrepo (fls. 100 a 112 del expediente digital 22). Y en resolución 128.843 de 2018, levantó el suspenso y ordenó el pago de la pensión de sobreviviente a las jóvenes María Yurley González Bedoya e Isbeli Yurani González Bedoya en un 33.33% a cada una, desde el 17 de noviembre de 2011 (fls. 190 a 206 del expediente digital 22).

1. De los requisitos para la pensión de sobrevivientes.

En el presente caso, se tiene claro que al haber fallecido el Sr. Saúl de Jesús González Arango el 17 de noviembre de 2011, la normatividad aplicable al caso concreto es el art. 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el art. 13 de la Ley 797 de 2003, el cual señala que:

“a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30 o más años de edad. En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos **de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte...**”
(Negrilla fuera del texto)

No existe discusión del cumplimiento del requisito de las semanas, dado que Colpensiones ha reconocido el derecho a la pensión de sobreviviente a los hijos del causante en las resoluciones 272.313 de 2017 y 128.843 de 2018.

Con respecto al requisito de la convivencia debe decirse lo siguiente:

Según la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia posición que es compartida por esta corporación, se exigen 5 años de convivencia antes de la muerte así se trate de afiliado o pensionado como se ha expuesto en las sentencias SL 877 de 2019 que retomó de a la sentencia SL 3468 de 2018

en la que se indicó: “... esta Sala ha sostenido que **la convivencia de cinco años** prevista en la citada norma **se predica tanto para el evento del fallecimiento del afiliado como del pensionado**, para efectos de la pensión de sobrevivientes, pues no existen razones válidas para establecer diferenciaciones entre los beneficiarios del primero y los del segundo y, porque, además, la convivencia constituye un elemento fundamental para la configuración del derecho pensional, que no sufrió modificaciones sustanciales con la entrada en vigencia de la Ley 797 de 2003, salvo en lo referente al tiempo mínimo de vida en común...”, y de la sentencia SL 14.068 de 2016 retomó “Este tema ya ha sido objeto de pronunciamiento por parte de esta Sala de la Corte, como se ve, además de la sentencia de casación que sirvió de sustentó al Tribunal, en entre otras, en la sentencia CSJ SL4835-2015, 22 abr. 2015, rad. 62770 en donde se reafirmó el criterio, según el cual, de conformidad con el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, tanto para beneficiarios de afiliados al sistema general de pensiones o de pensionados, el término de convivencia para la cónyuge o compañero (a) permanente es de **por lo menos cinco (5) años anteriores al fallecimiento del causante**. (...)” (Resalto de la Sala)

Respecto a esta manifestación, se advierte que en efecto la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia al interpretar el inciso 3° del literal b) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, ha expresado que es beneficiario de la pensión de sobrevivientes; **el cónyuge separado de hecho** que demuestre que convivió con el causante por lo menos (5) años en cualquier tiempo.

Lo anterior encuentra sustento entre otras en la sentencia SL 2015 de 2021, en la que con actualidad y precisión se resume esta interpretación de la norma, de la siguiente forma:

“...dicha norma resguarda el derecho pensional del cónyuge separado de hecho, con vínculo matrimonial vigente, que demuestre **el desarrollo de una convivencia no inferior a cinco (5) años, en cualquier tiempo**, sin necesidad de más aditamentos o requisitos no previstos en la norma como el de mantener un «vínculo dinámico y actuante» hasta el momento de la muerte.” (Resalto de la Sala)

No obstante, esta lectura textual de la norma deja al margen el aparte final del inciso 3° cuando dispone: “La otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la cual existe la sociedad conyugal vigente”, lo que implica que a las dos exigencias fijadas por la Corte Suprema de Justicia se sume la

existencia de una tercera, consistente en la existencia de sociedad conyugal vigente.

Con respecto de esa última exigencia se debe resaltar que fue objeto de demanda de constitucionalidad en el que se le atacó por ser violatoria del derecho de igualdad, en concreto por condicionar “...*el derecho a percibir una pensión de sobrevivientes a la existencia de sociedad conyugal, haciendo una diferenciación sin justificación con los cónyuges que no tienen una sociedad conyugal vigente, y tratando indistintamente los conceptos de matrimonio y sociedad conyugal, afectando además el derecho fundamental de los beneficiarios a la Seguridad Social*”.

Al estudiar el cargo, la Corte Constitucional en la sentencia C-515 de 2019, declaró su exequibilidad, indicando por demás que la exigencia de que la **sociedad conyugal se encuentre vigente** y no resulta caprichosa, toda vez que:

*“...El cónyuge separado de hecho con sociedad conyugal vigente mantiene en su totalidad los efectos de orden patrimonial. Si bien existe una ruptura de la cohabitación o convivencia y apoyo mutuo -a pesar de haber existido por lo menos 5 años-, los cónyuges no han expresado su deseo de dar por terminada su sociedad conyugal, al punto que preservan el vínculo económico y los derechos que de este se derivan. Por otro lado, **en el caso del cónyuge separado de hecho con sociedad conyugal disuelta, por decisión libre de los cónyuges se extinguen los efectos patrimoniales del vínculo matrimonial, aunado a la separación de hecho, por lo que, no existen en este caso vínculos afectivos o económicos que permitan inferir su calidad de beneficiario.**”* (Resalto de la Sala)

La lectura de este aparte, permite establecer que, para poder acceder a la pensión de sobrevivientes en ausencia de un vínculo sentimental por la separación de hecho, **debe existir al menos la voluntad de los cónyuges de mantener un vínculo económico, pero que, en ausencia de ambos, la prestación de sobrevivientes pierde su finalidad** pues, no existe en los cónyuges lazo alguno del que se pueda advertir una afectación que deba asumir el sistema de seguridad social en pensiones.

A pesar de lo anterior, la línea actual de la Corte Suprema de Justicia ha sido clara en afirmar que el hecho de exigir la prolongación de un vínculo actuante o económico con posterioridad a la separación de hecho y hasta el momento de la muerte es un requisito no previsto en el artículo 47 de la Ley

100 de 1993, tal y como se ha expresado en la sentencia SL 2015 de 2021, con radicado 8.113, en la que se indicó:

“Para arribar a dicha decisión, a su vez, desde el punto de vista jurídico por el que se enfila el cargo, el Tribunal analizó el texto del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por artículo 13 de la Ley 797 de 2003, en concordancia con la jurisprudencia desarrollada por esta corporación en torno al entendimiento de la norma y, con vista en ello, reconstruyó una subregla jurídica según la cual: el «cónyuge separado de hecho», con vínculo matrimonial vigente, conserva el derecho a recibir la pensión de sobrevivientes, si acredita la existencia de una convivencia de por lo menos cinco (5) años, desplegada «en cualquier tiempo», no necesariamente en los momentos inmediatamente anteriores a la muerte, así no exista otro potencial beneficiario en disputa. No obstante, teniendo como base, fundamentalmente, las sentencias CSJ SL12442- 2015, CSJ SL16949-2016 y CSJ SL4099-2017, agregó que ello era así, siempre y cuando, pese a la separación de cuerpos, se hubiera conservado «...un vínculo dinámico y actuante, de solidaridad y acompañamiento espiritual o económico...» hasta el momento de la muerte.

Esa orientación, pese a que en algún momento tuvo soporte en algunas decisiones emitidas por esta corporación, resulta errónea a la luz de la vigente interpretación que tiene esta Sala frente al artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, en tanto, como lo reclama la censura, dicha norma resguarda el derecho pensional del cónyuge separado de hecho, con vínculo matrimonial vigente, que demuestre el desarrollo de una convivencia no inferior a cinco (5) años, en cualquier tiempo, sin necesidad de más aditamentos o requisitos no previstos en la norma como el de mantener un «vínculo dinámico y actuante» hasta el momento de la muerte.

En la sentencia CSJ SL5169-2019 se explicó ampliamente al respecto: (...)

*Con fundamento en lo anterior, **el Tribunal incurrió en el error jurídico denunciado en el cargo, al interpretar el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, y entender que, para ser beneficiario de la pensión de sobrevivientes, el cónyuge separado de hecho debe acreditar, además de cinco (5) años de convivencia en cualquier tiempo, «...la presencia de un vínculo dinámico y actuante, de solidaridad y acompañamiento espiritual o económico...» hasta el momento de la muerte**” (Resalto fuera del texto)*

En ese orden, la presente Sala comparte la posición de la Corte Constitucional, en la que se propugna la vigencia de la sociedad conyugal a efectos de ser reconocida la prestación económica a un cónyuge supérstite separado de hecho, teniendo como base la finalidad de la pensión de sobreviviente. En consecuencia, puede concluirse que para dar aplicación al inciso 3° del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, para reclamar la pensión de sobrevivientes por la muerte de cónyuge resulta necesario: i) La

convivencia de cinco años en cualquier momento con anterioridad a la muerte, ii) La separación de hecho y iii) La existencia de sociedad conyugal vigente.

Partiendo de la normativa y jurisprudencia en cita, y valorada la prueba arrimada al proceso en su conjunto, con base en las reglas de la sana crítica y la libre formación del convencimiento (art. 61 del CPL), considera la Sala que los señores Sr. Saúl de Jesús González Arango y Sra. Olga Lucía Bedoya Restrepo convivieron desde **5 de diciembre de 1987 hasta el año 2007, ello es, superando la convivencia de 5 años en cualquier tiempo**, conforme se explica a continuación:

1º. Los señores Saúl de Jesús González Arango y Olga Lucía Bedoya Restrepo contrajeron matrimonio el **5 de diciembre de 1987** según registro civil de matrimonio de fl 13 del expediente digital 01.

2º. En el interrogatorio de parte, la demandante aseguró haber conocido al Sr. Saúl de Jesús González Arango, con el que contrajo matrimonio en el 1987 y de esa unión procrearon 5 hijos; y si bien, en un momento de su declaración dijo que la convivencia había sido hasta el año 2011, con posterioridad confesó peleó con el Sr. Saúl de Jesús González Arango porque no se entendía con él y por eso se fue de la casa con los 3 hijos menores, **en el año 2007**; que al momento de la muerte, el Sr. Saúl de Jesús González Arango vivía solo y no le conoció compañera permanente.

3º. De la investigación administrativa realizada por Colpensiones a través del Consorcio Cosinte, se extrae de las entrevistas allí realizadas lo siguiente (fls. 117 a 134 expediente digital 22):

- La Sra. Luz Marleny Sánchez Muñoz dijo que **la pareja convivió por 20 años** hasta el día que el causante falleció;
- La Sra. María Yurley González Bedoya (hija de la pareja) manifestó que sus padres **convivieron 24 años** hasta el día que su padre falleció; que se separaron algunos meses, pero dicha separación había sido hacía 20 años, posteriormente convivieron nuevamente y en el **año 2008 existió una nueva separación** por un año y después, su padre realizaba visitas esporádicas a la casa por sus labores y ello se dio hasta la muerte de su padre;
- La Sra. Luz Marina González Arango (hermana del causante) dijo que la demandante no convivió con su hermano en los últimos 5 años de

vida; la Sra. Olga Lucía Bedoya Restrepo estaba viviendo con otra persona y en los últimos 5 años de vida, el Sr. Saúl de Jesús González Arango vivió solo.

- La Sra. Teresita González Arango (hermana del causante) dijo no conocer a la Sra. Gloria Elena Gómez Ramírez; que los señores Olga Lucía Bedoya Restrepo y Saúl de Jesús González Arango se separaron en el **año 2007** y la demandante inició una relación amorosa con otro señor y ese fue el motivo por el que su hermano se separó de ella; que el hermano le solicitó el divorcio y la demandante no se lo quiso dar; y su hermano vivió los 5 años de vida en una habitación solo.
- La Sra. Gloria Elena Gómez Ramírez (beneficiaria del causante en salud) aseguró haber convivido con el Sr. Saúl de Jesús González Arango por dos años, antes del fallecimiento, sin que los familiares se enteraran de dicha relación.

4º. En declaración extrajuicio del 7 de mayo de 2012, la Sra. Teresita de Jesús González Arango (hermana del causante) afirmó la voluntad de su hermano era que la pensión de sobreviviente no le correspondiera a su exesposa, con quien estaba separado hacía 5 años sino a los hijos, y eso se demostraba con la declaración extrajuicio con la que el Sr. Saúl de Jesús González Arango la retiró del grupo familiar como beneficiaria, y porque la Sra. Olga Lucía Bedoya Restrepo desde la separación convivía con el Sr. Fredy Ortiz (fl. 31 del expediente digital 22).

5º. En declaración extrajuicio del 24 de enero de 2012, los señores Raúl Antonio Bedoya Taborda y María Fátima Elsy Cano de Muñoz (amigos y vecinos del causante) manifestaron que conocieron al causante durante 20 y 17 años respectivamente, el cual falleció el 17 de noviembre de 2011, era casado con sociedad conyugal vigente, con la Sra. Olga Lucía Bedoya Restrepo, los cuales vivieron bajo el mismo techo, en forma continua e ininterrumpida, compartiendo techo, lecho y mesa desde el 5 de diciembre de 1987 hasta el día del fallecimiento; el Sr. Saúl de Jesús González Arango veló económicamente por el hogar y su esposa, la cual no recibía ingresos y se encargaba de sufragar todos sus gastos, hasta los de salud y lo mismo dijo la demandante en declaración extrajuicio rendida en la misma fecha (fls. 70 y 72 del expediente digital 22). Declaraciones que no son concordantes con lo manifestado por la demandante en su interrogatorio de parte, ni con

las declaraciones obtenidas en la investigación administrativa, donde informan que la pareja convivió hasta el año 2007-2008.

6º. Otro de los indicios que dan cuenta que la separación de la pareja tuvo lugar en los años 2007-2008 es la conciliación en materia de alimentos a favor de los hijos Jeferson Stiven, María Yurley e Isbeli Yurani González Bedoya, celebrada en la Comisaría de Familia de San Antonio de Prado el 6 de marzo de 2008 (fl. 25 del expediente digital 36).

7º. Por medio de certificado de afiliación, emitido por la EPS Saludcoop, el 14 de febrero de 2012, se extrae que el Sr. Saúl de Jesús González Arango afilió a la Sra. Olga Lucía Bedoya Restrepo el 10 de octubre de 2003 y la desafilió el **28 de julio de 2008** y afilió a la Sra. Gloria Elena Gómez Ramírez en calidad de compañera permanente el 1º de octubre de 2008 y la desafilió el 16 de marzo de 2010 (fl. 74 del expediente digital 22), prueba que son un indicio que la fecha de la separación de hecho de los señores Saúl de Jesús González Arango y Olga Lucía Bedoya Restrepo, tuvo lugar entre los años 2007-2008, conforme lo confiesa la demandante y se extrae de la investigación administrativa de Colpensiones y no hasta la muerte del afiliado.

En consideración a lo anterior, se permite la Sala concluir que los señores Saúl de Jesús González Arango y Olga Lucía Bedoya Restrepo convivieron entre el 5 de diciembre de 1987 al año 2007, ello es, entre 19 y 20 años aproximadamente, lo que hace que la demandante cumpla el requisito de la convivencia de 5 años en cualquier tiempo y la sociedad conyugal estaba vigente, pues no existe prueba que demuestre lo contrario.

2. Del retroactivo pensional

En primera instancia se reconoció en la suma de \$33.188.850, causado desde el 10 de noviembre de 2013 al 31 de mayo de 2022, acogiendo las subreglas establecidas en la sentencia SL 803 de 2022, bajo el entendido que Colpensiones debió dejar en suspenso la cuota parte del 50% de la cónyuge, hasta que la justicia ordinaria determinara si tenía o no derecho. Con base en ello, condenó a Colpensiones a reconocer a la demandante el retroactivo de la cuota parte pensional del 50% que le corresponde desde el 10 de noviembre de 2013 en virtud de la prosperidad parcial de la excepción de prescripción y procediendo a realizar la disminución de la cuota parte

pensional reconocida a los jóvenes Jeferson Stiven González Bedoya e Isbeli Yurani González Bedoya, de las cuales se desconoce si en la actualidad la devengan, dado que de la prueba que reposa en el plenario, ellos están suspendidos de la nómina, sin embargo actualmente son menores de 25 años; sin embargo en el evento de considerarse que la demandante tiene derecho al acrecimiento, la accionada deberá reconocerlo.

Y aclaró la A Quo que no se condenaría a los litisconsortes necesarios o hijos del causante que recibieron la pensión, a retornar las cuotas partes recibidas indebidamente conforme lo establece el precedente judicial analizado, porque Colpensiones debió haber dejado en suspenso el 50% de la cuota parte que solicita la demandante, porque la entidad tuvo conocimiento de la reclamación era concomitante con los demás beneficiarios y no lo hizo.

Decisión que será MODIFICADA teniendo en cuenta que:

- Según registro civil de nacimiento de fl 15 del expediente digital 01 y 52 y 58 del expediente digital 22, la hoy demandante es madre de los jóvenes María Yurley, Isbeli Yurani y Jeferson Stiven González Bedoya, quienes actúan en el presente proceso en calidad de litisconsortes necesarios, a los cuales Colpensiones les reconoció la pensión de sobreviviente por la muerte del Sr. Saúl de Jesús González Arango.
- De los registros civiles de nacimiento enunciados se extrae que los hijos de la pareja, al momento de la muerte del afiliado, eran menores de edad, ya que la joven María Yurley González Bedoya nació el 30 de mayo de 1995 lo que hace que al momento de la muerte de su padre tenía **16 años de edad**; la joven Isbeli Yurani González Bedoya nació el 25 de mayo de 1997, por lo tanto, al 17 de noviembre de 2011 tenía **14 años de edad**; y el joven Jeferson Stiven González Bedoya nació el 31 de agosto de 2000, lo que genera que al fallecimiento de su padre, contara con **11 años de edad**.
- Por su parte, en Resolución 272.313 del 28 de noviembre de 2017, Colpensiones reconoció la pensión de sobreviviente al joven Jeferson Stiven González Bedoya y para esa fecha, dicho beneficiario aún era menor de edad, al tener **17 años de edad**, con lo que se logra concluir, que el retroactivo pensional reconocido desde el 17 de

noviembre de 2011 al año 2017 y las mesadas percibidas hasta el 30 de agosto de 2018 (día anterior al cumplimiento de los 18 años de edad) debieron ser recibidas y administradas por la hoy demandante, por tratarse de un menor de edad.

- Y en la resolución 128.843 del 16 de mayo de 2018, se reconoció la pensión de sobreviviente de las jóvenes María Yurley e Isbeli Yurani González Bedoya, quienes a esa fecha contaban con 23 y 21 años de edad respectivamente.

De lo anterior se concluye que en este evento en particular, se trata de una pensión de sobreviviente que le fue reconocida en 33.33% a cada uno de los tres hijos de la pareja conformada por el causante y la hoy demandante, y de la cual se hace necesario resaltar que si bien, a las jóvenes María Yurley e Isbeli Yurani González Bedoya les fue reconocida la prestación de sobreviviente en forma retroactiva cuando eran mayores de edad, al tener aproximadamente 23 y 21 años de edad respectivamente, no se puede pasar por alto que la pensión de sobreviviente del joven Jeferson Stiven González Bedoya fue recibida y administrada por la hoy demandante hasta el 30 de agosto de 2018, queriendo ello significar que se trata de una prestación económica que benefició al grupo familiar y en forma directa fue administrada por la Sra. Olga Lucía Bedoya Restrepo, lo que da lugar a que no haya lugar al reconocimiento del retroactivo pensional desde el 10 de noviembre de 2013 (fecha de reconocimiento del retroactivo pensional en primera instancia), pues se repite, la hoy demandante recibió la cuota parte que le correspondía a su hijo Jeferson Stiven González Bedoya, en calidad de representante, hasta el 30 de agosto de 2018 según se extrae de la resolución 272.313 de 2017 (fls. 100 a 112 del expediente digital 22).

Visto lo anterior, se hace necesario remitirnos a lo reseñado por la Corte Suprema de Justicia en la sentencia SL 540 de 2021, en la cual se analizó el derecho a la sustitución pensional de un cónyuge supérstite, al que le negaron el derecho pensional pero le fue reconocida la sustitución pensional a sus hijos menores de edad en un 100%, en dicha oportunidad el Alto Tribunal consideró que la pensión de sobreviviente debía pagarse *“a partir de la ejecutoria de la presente sentencia o desde la fecha en que se haya extinguido el derecho pensional para los hijos de la causante o desde cuando la demandada haya suspendido el pago del 50% de la mesada en disputa, si alguno de los dos últimos eventos ocurrió con anterioridad al primero mencionado, con el derecho a acrecer las cuotas correspondientes*

en las circunstancias que la ley prevé para ello. Si por efecto de lo aquí dispuesto se produce un retroactivo, el mismo será indexado hasta el momento efectivo de su pago”, y para esa decisión rememoró lo dicho en las sentencias 21.572 de 2006, 40.942 de 2011, SL 4627 de 2016 y SL 4604 de 2019, al señalar:

“... Respecto de este punto, la Sala se ha pronunciado en diversas oportunidades, no sólo en las sentencias invocadas por la censura, sino, además, por ejemplo, en la providencia CSJ SL4627-2016 y, más recientemente, en la CSJ SL4604-2019, en la que se dijo:

*Sobre el particular vale resaltar que **Porvenir S.A. canceló a la menor hija de la actora -también beneficiaria de la prestación- la totalidad del crédito a su cargo;** esto es, en un 100%, proceder que por considerarse válido, produce efectos liberatorios de la obligación de la administradora respecto de cada una de las mesadas canceladas; en consecuencia, mal podía ordenarse el reconocimiento del 50% a favor de la accionante a partir de la fecha de la expedición de la sentencia, pues con ello se desconocerían dos circunstancias: (i) que contra tal decisión procedían los recursos de ley y (ii) si el pago del porcentaje en disputa -50%- se suspendió o no.*

[...]

De lo anterior, se advierte que no resulta dable generar un doble pago de la prestación por parte del fondo demandado, teniendo en cuenta que durante el reconocimiento –de buena fe- del 100% de su valor a la menor hija del causante, la demandante la administró en su calidad de representante legal.

En tal dirección, erró el Tribunal al confirmar la decisión de primer grado únicamente en cuanto estableció que el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, procedía a partir de la expedición de la sentencia de primer grado e impuso intereses de mora a partir de dicha calenda. En consecuencia, se casará la sentencia impugnada en cuanto a tal aspecto.

En coherencia con lo discurrido, al estar demostrado el yerro manifiesto del Tribunal, de haber ignorado las circunstancias ya expuestas, el cargo prospera y se habrá de casar la sentencia en este particular aspecto.

I. SENTENCIA DE INSTANCIA

*En sede casacional, recuérdese, no fue objeto de discusión el derecho reconocido al demandante Luis Felipe Ossa Suárez sobre la sustitución de la pensión especial vitalicia de jubilación convencional, de que trata el parágrafo 1° del artículo 112 de la convención colectiva de trabajo vigente en Ecopetrol para los años 2001-2002, como que, por las circunstancias acreditadas y no discutidas por las partes, **si bien es cierto que su reconocimiento debe hacerse desde el 16***

de noviembre de 2005, fecha de fallecimiento de la causante, su pago directo en un 50% al actor, ya como titular reconocido del derecho, debe producirse o desde la ejecutoria de la sentencia o desde la extinción del derecho de los hijos de la causante, si tal hecho ya ocurrió, situación última que también daría lugar al acrecimiento pensional hasta el 100% del valor de la prestación (CSJ SL, 07 mar. 2006, rad. 21572; CSJ SL, 06 sep. 2011, rad. 40942; CSJ SL4627-2016 y CSJ SL4604-2019).

(...)

En ese sentido, al haberse referido la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en más de tres (3) oportunidades sobre este asunto, se constituye doctrina probable conforme a lo establecido en el artículo 4° de la Ley 169 de 1896, siendo pertinente resaltar que *“todas las autoridades públicas, de carácter administrativo o judicial, de cualquier orden, nacional, regional o local, se encuentran sometidas a la Constitución y a la ley, y que como parte de esa sujeción, las autoridades (...) se encuentran obligadas a acatar el precedente judicial dictado por las Altas Cortes de la jurisdicción ordinaria, contencioso administrativa y constitucional.”*, según lo indicado en la sentencia C-539 del 6 de julio de 2011, por lo que este despacho comparte y a su vez acogerá esta posición y no la posición adoptada en la sentencia SL 803 de 2022 invocada en primera instancia.

Así las cosas, de conformidad con los parámetros dados por la Corte, para la Sala no hay lugar a que el retroactivo de la pensión de sobreviviente sea reconocido *“desde la fecha en que se haya extinguido el derecho pensional para los hijos de la causante”*, toda vez que el joven Jeferson Stiven González Bedoya al haber nacido el 31 de agosto de 2000, aún tiene derecho a la pensión de sobreviviente, en caso de acreditar estudios hasta que cumpla los 25 años de edad, por lo tanto, se acogerá el presupuesto de pagar la prestación económica ***“desde cuando la demandada haya suspendido el pago del 50% de la mesada en disputa”***, al poderse constatar, que la joven María Yurley González Bedoya nació 30 de mayo de 1995, lo que da lugar a que el cumplimiento de los 25 años de edad se generó el **30 de mayo de 2020**, y la joven Isbeli Yurani González Bedoya por nacer el 25 de mayo de 1997 cumplió los 25 años de edad el **25 de mayo de 2022**, en consecuencia, **a partir del 25 de mayo de 2022** es cuando Colpensiones suspendió el pago del 50% de la mesada pensional a sabiendas que a cada una de las hijas de la demandante se le había reconocido una cuota parte del 33.33%.

En consideración a lo expresado, se MODIFICARÁ la sentencia de primera instancia, para en su lugar CONDENAR a Colpensiones a pagar a la Sra. Olga Lucía Bedoya Restrepo la suma de **\$2.160.000** por concepto de retroactivo de la pensión de sobreviviente, causado **desde el 25 de mayo al 31 de julio de 2022**, valor que se sustenta en la siguiente tabla:

REAJUSTE PENSIONAL						
Año	IPC	Valor reconocido	Valor real	Diferencia mensual	# mesadas	Total retroactivo
2011	3,73%	\$ 0	\$ 535.600	\$ 535.600		\$ 0
2012	2,44%	\$ 0	\$ 566.700	\$ 566.700		\$ 0
2013	1,94%	\$ 0	\$ 589.500	\$ 589.500		\$ 0
2014	3,66%	\$ 0	\$ 616.000	\$ 616.000		\$ 0
2015	6,77%	\$ 0	\$ 644.350	\$ 644.350		\$ 0
2016	5,75%	\$ 0	\$ 689.454	\$ 689.454		\$ 0
2017	4,09%	\$ 0	\$ 737.717	\$ 737.717		\$ 0
2018	3,18%	\$ 0	\$ 781.242	\$ 781.242		\$ 0
2019	3,80%	\$ 0	\$ 828.116	\$ 828.116		\$ 0
2020	1,61%	\$ 0	\$ 877.803	\$ 877.803		\$ 0
2021	5,62%	\$ 0	\$ 908.526	\$ 908.526		\$ 0
2022		\$ 0	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	2,16	\$ 2.160.000
TOTAL						\$ 2.160.000

3. Frente a la indexación de la condena

Se confirmará la condena impuesta de pagar la indexación del retroactivo pensional, toda vez que la parte accionante no tiene por qué soportar la responsabilidad de asumir la pérdida del valor adquisitivo, y el capital adeudado ha sido afectado por pérdida del valor adquisitivo de la moneda, más aún cuando el artículo 180 del CGP indica que los indicadores económicos nacionales son hechos notorios, sin embargo, para su liquidación, Colpensiones deberá tomar como IPC inicial el del mes de mayo de 2022 y el IPC final el del momento del pago de la obligación.

4. Finalmente, en relación a las costas procesales.

Se CONFIRMARÁN porque el art. 365 del CGP reconoce costas “1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso...” y en este evento se condenó a Colpensiones al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a la demandante y la indexación del retroactivo pensional.

Sin costas en esta instancia, por ser conocido en el grado jurisdiccional de consulta.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia de primera instancia, para en su lugar **CONDENAR** a Colpensiones a pagar a la Sra. Olga Lucía Bedoya Restrepo la suma de **\$2.160.000** por concepto de retroactivo de la pensión de sobreviviente, causado **desde el 25 de mayo al 31 de julio de 2022**, conforme la tabla anexa en la parte motiva de la providencia; suma que deberá ser indexada tomando como IPC inicial el correspondiente al mes de mayo de 2022 y como IPC final el vigente al momento del pago de la obligación.

SEGUNDO: CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Medellín, de conformidad con la parte motiva de la presente providencia.

TERCERO: Sin costas en esta instancia, por ser conocido en el grado jurisdiccional de consulta.

CUARTO: Las anteriores decisiones se notifican por EDICTO, conforme lo dispuesto en la sentencia AL 2550, radicación 89628 del 23 de junio de 2021 de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

Los Magistrados.



HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ



GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ



CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA



SECRETARÍA SALA LABORAL
EDICTO VIRTUAL

La secretaría de la Sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín notifica a las partes la sentencia que a continuación se relaciona:

DEMANDANTE	: OLGA LUCÍA BEDOYA RESTREPO
DEMANDADO :	: COLPENSIONES
LITISCONSORTE NECESARIO	: MARÍA YURLEY GONZÁLEZ BEDOYA, ISBELI YURANI GONZÁLEZ BEDOYA y JEFERSON STIVEN GONZÁLEZ BEDOYA
TIPO DE PROCESO	: ORDINARIO
RADICADO NACIONAL	: 05-001-31-05-013-2016-01439-01
RADICADO INTERNO	: 154-22
DECISIÓN	: MODIFICA, CONDENA y CONFIRMA

Magistrado Ponente
HUGO ALEXANDER BEDOYA DIAZ

El presente edicto se fija en la página web institucional de la Rama Judicial <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/126> por el término de un (01) día hábil. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

CONSTANCIA DE FIJACIÓN

Fijado el 27 de julio de 2022 a las 8:00am

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN

Se desfija el 27 de julio de 2022 a la 5:00pm


RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
SECRETARIO